

AMPLIACIÓN EN LA SCJN, BAJO LA LUPA

¿Quié bono?

● JOSÉ RAMÓN COSSIO PLAZ



Es evidente la inconstitucionalidad del artículo que amplía el plazo del encargo del presidente de la Suprema Corte y de varios integrantes del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Por qué, entonces, lo aprobaron los legisladores morenistas? Cicerón y Lenin aconsejaban preguntarse, ¿quié bono? Por quién se beneficia de una situación. La respuesta son López Obrador y su movimiento. Gracias a la reforma cuentan con una Corte deslucida por el conflicto que le internalizaron, un

Consejo amenazante de la independencia judicial y una imagen de acompañamiento de la justicia a su proyecto político. El presidente, los morenistas y sus secuaces buscan desequilibrar ministros, amedrentar jueces y desanimar litigantes. El beneficio de política a la justicia les puede ser enorme. El tiempo mostrará la magnitud de los daños causados por un artículo transitorio. Por una acción que expresó las vanidades y las necesidades de sus creadores y realizadores en detrimento de la convivencia jurídica de todos los demás. ● **Ministro en retiro**

La casa rota

● DIEGO VALADES



El maniqueísmo fue una doctrina que escindió a la sociedad entre buenos y malos. Los argumentos dicotómicos para segmentar a las comunidades han estado presentes a lo largo de la historia, por lo general con desenlaces conflictivos: tiranos y troianos, griegos y globos, moros y cristianos, proletarios y burgueses son ejemplos de rivalidades que exacerbaban pasiones destructivas. En México se multiplican expresiones y posiciones para re-

forzar las identidades grupales, políticas o ideológicas a partir de tesis maniqueas. Abandonan la división del país. El episodio más reciente intenta convertir a la Constitución en un símbolo de conservadurismo y a la anti-Constitución en un símbolo de cambio. En un ambiente ya crispado por la enfermedad, el desempleo, la pobreza, la violencia de género, la inseguridad y la retórica, promover además la fractura constitucional acentúa la percepción de que habíamos una casa rota. ● **Investigador emérito de la UNAM**

El dominguillo en la Corte

● FRANCISCO VALDÉS UGALDE



Es de almarar que el Presidente de la República afirma que "si no se amplía el periodo [del ministro presidente Arturo Zaldívar] va a ser más de lo mismo". Ningún otro ministro le inspira confianza. La imposición de esta medida inconstitucional por Morena, primero deslucida a hurta, sin tiempo para discutir y votarla a costa de una ruptura interna, revela la intensidad con que AMLO ansía que sea su mano la única que controle la reforma judicial y que el presi-

dente de la Corte actúe en calidad de dominguillo. Los epígonos de AMLO insisten en que esta violación a la Constitución es democrática, pero son y serán siempre incapaces de explicar por qué, teniendo la fuerza de que disponen en el gobierno y ambas cámaras no pueden imaginar un camino de transformación que no se corresponda con un manual de instrucciones para la autocracia. La razón es muy simple: porque su proyecto es la autocracia y todo autócrata se presenta con la bandera de la libertad y el grito ferrugineo de los ajustados. ● **Académico de la UNAM**

Expertos analizan para EL UNIVERSAL el cambio que se impulsa para ampliar el mandato del ministro presidente Arturo Zaldívar al frente de la SCJN y de la Judicatura Federal. Advierten que con esta reforma AMLO busca beneficiarse, que se profundiza la división entre un supuesto conservadurismo y el cambio que el Mandatario encabeza o que se ha dañado a la división de poderes y al Poder Judicial



Arturo Zaldívar. Lelo de Larrea es el actual ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidente del Consejo de la Judicatura Federal.

Reforma que no tiene sentido

● PEDRO SALAZAR UGARTE



Desde mi perspectiva, el artículo transitorio mediante el que se amplían los mandatos del presidente de la SCJN como tal —no como ministro, lo que me parece irrelevante— y de las personas que ocupan actualmente los cargos de consejeros de la Judicatura es inconstitucional. Se trata de una invasión de competencias y de un acto indebido por incompetencia. El Congreso no puede decidir quién presidirá a la SCJN, simple y llano. ¿Por qué es grave dejar pasar una violación tan clara a la Constitución? Mi respuesta es sencilla, pero severa: si una decisión como ésta prevalece, el derecho se vuelve irrelevante. Deja de tener sentido apelar a la Constitución y acudir a la justicia. De hecho, si el transitorio surte efectos, ¿para qué sirve la ambiciosa y necesaria reforma judicial que lo cobija? Se habría fortalecido al poder encargado de defender a la Constitución con una reforma coronada con un artículo transitorio que la desfondó. ● **Director de Investigaciones Jurídicas de la UNAM**

Garantizar la tutela judicial

● ESMERALDA E. AROSE-MENA DE TROTTIN



Es importante el análisis de aspectos claves en el mejoramiento de la administración de justicia para la efectividad y eficacia de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Puntos que destacar: la compatibilidad constitucional del artículo transitorio y la afectación a la independencia del Poder Judicial en su aplicación, y es la propia SCJN a quien corresponde su designación. Y el CJF como órgano de control se afecta la transparencia en las actividades de Contraloría. Desde la CIDH algunos estándares. Garantías suficientes para que el sistema de justicia no esté sometido a restricciones por otros poderes. Los procesos de designación, ratificación o reelección de los operadores de justicia no estén sujetos a la discrecionalidad de autoridades ni a interferencia alguna. La selección de la presidencia de las cortes, hecha por sus pares, fortalece su actuar independiente. ● **Comisionada Relatora CIDH/OEA**

Mal congénito en constitucionalismo

● ANA MICHAELA ALTERIO



Como cualquier enfermedad, si no se trata, con el tiempo empeora. En México, desde sus orígenes, la Constitución ha sido utilizada como instrumento de poder en manos de las élites y no como un límite al poder. El constitucionalismo, entre otras funciones, establece procedimientos de creación, reforma y derogación de normas. Para eso crea instituciones. Las instituciones, en tanto, pretenden estabilizar un sistema democrático, requieren tiempo, aunque esto signifique "tomar el camino largo", el del diálogo y la negociación, el del voto mayoritario, pero dentro de la Constitución. Esto asegura que el partido político en el poder realice su agenda de gobierno en tanto respete las reglas del juego, es decir, mientras no quiera clausurar los procedimientos democráticos. Esto garantiza el pluralismo y la continuidad democrática. Ahora, como desde 1917, necesitamos apostar por el constitucionalismo, pues si seguimos así permaneceremos en el desamparo. ● **Académica del ITAM**

La intromisión genera ruptura

● JESÚS OROZCO HENRIQUEZ



Ampliar el periodo del presidente de la SCJN viola tanto el derecho internacional de los derechos humanos. 1) Al usurpar las atribuciones del Poder Judicial, el Legislativo vulnera la división de poderes e independencia judicial, a través de una ley privativa que viola el derecho de los ministros a elegir y/o ser elegidos presidente de la SCJN. 2) Vulnerar la independencia judicial afecta el acceso a la justicia, como ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La indebida intromisión orgánica y la violación de los derechos humanos de los justiciables generan una ruptura constitucional. Cuando una mayoría legislativa viola deliberadamente la Constitución y los derechos humanos erosiona la democracia y deviene en tiranía. Confío en que la Suprema Corte de Justicia defenderá la Constitución y hará prevalecer el Estado de derecho a fin de evitar que México incurra en responsabilidad internacional. ● **Investigador de la UNAM**

Sin espacio para derechos

● FRANCISCA POU



Tras el claro refuerzo a la justiciabilidad de los derechos que supuso la reforma constitucional de 2011, era de esperar que, durante el gobierno de la 4T, la Suprema Corte gozara de las condiciones para dar impulso definitivo a la garantía de los derechos sociales y ambientales, donde queda mucho por hacer. Ese horizonte parece ahora lejano. El debate jurídico no está centrado en avanzar y profundizar, sino en impedir que se caiga lo más básico: la democracia y la Constitución. El gobierno actual ha condenado a la Corte a resolver asuntos de alto voltaje bajo enorme presión. Ello no deja casi tiempo al Poder Judicial para desarrollar criterios que abonen a la superación de la pobreza, la mejora de la educación, la salud o el ambiente. En ese contexto, las transferencias directas de dinero pueden seguir operando como simples herramientas de acción política y no como prestaciones integradas a esquemas de garantía constitucionalmente aseguradas. ● **Académica del ITAM**

Jueces y democracia

● ANDREA POZAS LOYO



Todos, más allá de la polarización política, debemos preocuparnos por las consecuencias que las recientes reformas tendrán sobre quienes integran el Poder Judicial. ¿Por qué? La democracia funciona siempre y cuando las fuerzas políticas consideren que la mejor opción es someterse a los resultados de elecciones periódicas. Aquí es donde la independencia del Poder Judicial es clave. Que nuestros jueces puedan decidir conforme a derecho, sin miedo, permite que quien no está en el gobierno sepa que sus derechos están protegidos y por tanto acate el triunfo de la actual mayoría. Por supuesto, ello implica límites a lo que el gobierno en turno puede hacer. Pero estos límites, dentro de los cuales puede implementarse la agenda política mayoritaria, son los mismos que hoy hacen posible la regulación pacífica de los conflictos y que mañana limitarán al gobierno protegiendo contra abusos a quien en el presente tiene el poder. ● **Investigadora de la UNAM**

Captura indirecta del Poder Judicial

● ERIKA BÁRCENA



Mucho se ha escrito ya sobre la inconstitucionalidad de dicho transitorio. A todas estas cuestiones, yo sumaría el hecho de que la concentración de poder en quien preside Corte y Consejo de la Judicatura, en este caso el ministro Zaldívar, hasta ahora parece sólo haber resultado en una cacería de brujas con procesos abiertos a distintos jueces por supuestos actos de corrupción. La completa opacidad de dichos procesos no debiera ser ignorada, puesto que da lugar a serios cuestionamientos de su legitimidad, ya que no sería la primera vez que el CJF utilice estos medios administrativos para disciplinar a los jueces y al PJP. Esta situación se agrava con el discurso, de amplia legitimación social, que tacha a los jueces de corruptos por antonomasia. Así, todo cambia para que permanezca exactamente igual, o quizá ahora agravado en la medida en que pone este discurso en el centro como justificación. El transitorio da lugar a una captura indirecta del PJP, lejos de una solución a sus más reales problemas. ● **Investigadora de la UNAM**